

Editorial

Escribimos estas líneas editoriales en medio de una situación de pandemia vinculada a la enfermedad COVID19, que ha revuelto nuestras vidas y las de millones de compatriotas, mucho más allá de lo pensado hasta hace poco tiempo atrás. Una crisis mundial de proporciones históricas, que ha puesto sobre la mesa todo lo que hasta hace poco tiempo atrás era considerado parte de una normalidad. Estos cambios van desde las modificaciones en nuestra vida diaria que involucran la sobrecarga hasta lo difuso de los tiempos de trabajo-ocio.

Es un punto siempre resaltado que en las crisis, cuando todo está patas para arriba, es posible lograr cambios sociales que en otros tiempos serían difíciles de procesar. Por eso es muy significativo tratar de comprender no solo lo que pasa, sino las alternativas que se plantean como caminos de salida. Siguiendo con el ejemplo antes mencionado, se produjo en estos últimos meses un fuerte avance de modalidades de teletrabajo, una reforma del proceso de organización del trabajo que interesaba desde hace años al empresariado. Esto se hizo sin mediar capacitaciones ni readecuaciones de equipamiento o instalaciones, que corrieron por cuenta de quienes trabajan: pero ¿acaso todes cuentan con espacios y dispositivos aptos para trabajar desde la casa? Tampoco entró en consideración la posibilidad de resolver las tareas de cuidados u otras tareas domésticas, que en el contexto de las diversas cuarentenas en curso dejaron de estar disponibles por provisión estatal o resueltas por contratación en el mercado. Incluso más, la disolución de fronteras entre los tiempos de trabajo y los destinados a usos personales (incluyendo el ocio), subordina toda la vida a la organización del trabajo. Todo esto, lejos de agotar el tema, señala problemáticas asociadas que se han desplegado con mayor alcance y velocidad de las posibles antes de la pandemia, y es improbable que cuando se supere esta etapa sanitaria se vuelva atrás sin más. Parte de lo conquistado en favor de la lógica del capital quedará establecido.

Los debates públicos siguen vinculados con la disyuntiva salud versus economía, que bien podría leerse como vida versus ganancias empresarias, dilema sobre el que se han escrito ya numerosas páginas. Parece que la crisis ha puesto en el centro de la escena si discutimos la forma de profundizar las tensiones estructurales que existían o la forma de garantizar una vida digna de ser vivida. Porque, de hecho, aunque podamos encontrar numerosas particularidades, las crisis son recurrentes bajo la forma de organización y distribución de la producción capitalista. Y éstas siempre se montan sobre problemas estructurales que les preceden.

La crisis no es resultado de la aparición del virus SARS-Cov-2, ni tampoco lo es de forma exclusiva de las políticas públicas con las que se lo busca contener. El problema de que una parte creciente de la población no pueda vender su fuerza de trabajo en el mercado o lo tenga que hacer a precio vil no apareció en 2020. Que la apertura de las economías nacionales y la conformación de cadenas globales de valor implican una gran interdependencia entre los países, y ésta puede ser particularmente problemática en relación a bienes estratégicos (como alimentos o fármacos de tratamiento y vacunas), no es algo que haya emergido en estos meses. Que la economía mundial se haya financierizado de forma creciente, reforzando la desigualdad y fomentando el estancamiento, no es una novedad. De hecho, ya se había reforzado como tendencia desde el anterior estallido en 2008. Al igual que la falta de coordinación en las políticas internacionales, merced de un severo desorden geopolítico que va mucho más allá de la economía. Y similares argumentos podríamos presentar sobre las desigualdades de género y origen étnico, la sobrecarga de tareas de cuidado sobre las mujeres, o la presión sobre el ambiente ligada a la privatización de bienes comunes y el consumismo exacerbado.

En estos sentidos, y muchos más, la crisis realza problemas que ya estaban presentes. Saludamos que se hayan puesto al descubierto ante los ojos de todos. Porque esto obliga a pensar respuestas en términos de políticas públicas, especialmente para contener a los y las más desprotegidas.

En el caso particular de Argentina, la situación se enfrenta con una fuerza política recién asumida que debe lidiar no solo con la crisis mundial, sino con el legado de gobiernos dictatoriales y democráticos que desarrollaron en el proyecto devastador de Cambiemos. Ya hace dos años, publicamos como Sociedad de Economía Crítica el documento *10 puntos para enfrentar la crisis e impulsar una economía de los trabajadores*¹, y más allá de la "nue-

1- Disponible en <http://www.sociedaddeeconomicritica.org/editoriales/10-puntos-enfrentar-la-crisis-e-impulsar-una-economia-les-trabajadores/>

va normalidad” que imponga la pandemia, podemos/necesitamos decir que esas propuestas mantienen vigencia.

Podíamos entonces que existía una necesidad de “suspender el pago de la deuda externa y proceder a una auditoría que castigue a todos los responsables. El uso del concepto de deuda odiosa aplica al caso y debería tomarse en cuenta la soberanía jurídica del país, evitando sostener las prerrogativas de jurisdicciones extranjeras que sólo convalidan demandas de capitales privados, nunca de los Estados.” Al momento de escribir esta editorial, la negociación sigue el curso definido desde el inicio, esto es: la búsqueda de sostenibilidad. Habiendo relegado las demandas sobre legalidad y legitimidad, e incluso las urgencias propias de la pandemia, el gobierno se enfocó en lograr un acuerdo con los acreedores privados bajo legislación extranjera, con los cuales ha estado negociando condiciones de pago. La sostenibilidad aquí está entendida en términos de capacidad de crecimiento de la actividad económica y de las exportaciones, sin considerar elementos vinculados a la sostenibilidad ambiental, laboral o social; es decir, sin considerar la sostenibilidad de la vida. El resultado de estas negociaciones condiciona toda la agenda, al punto de que hasta la fecha se está gobernando sin un presupuesto aprobado por el Congreso.

Asimismo, señalábamos en aquel documento la necesidad de una redistribución progresiva de los ingresos vía “un shock redistributivo de ingresos en beneficio de los trabajadores del país, empezando por los más pobres, los jubilados, personas trans, travas y personas migrantes.” Hoy se ha establecido, de manera excepcional el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y se han incrementado los montos de las asignaciones universales por hijo/a así como de planes sociales. Sin embargo, la realidad de desamparo, aunque más cruda y profunda, no puede pensarse como infrecuente. Como en los tiempos de escritura de aquel documento, la situación de pobreza estructural, trabajadorxs pobres y precarizados/as en todas sus formas, no cambia con la reactivación de la economía. Uno de los resultados más contundentes de esta política es que puso al descubierto que 8 millones de personas habitan en hogares que calificaron inicialmente para el IFE, es decir que no tienen otro ingreso, salvo las asignaciones estatales.

Incluso con las políticas públicas de activación, de no mediar decisiones de corte estructural, los sectores populares en nuestro país, saldrán de esta crisis recargada peor de lo que entraron: paritarias paradas en el Estado, acuerdos de salarios a la baja entre cámaras patronales y sindicatos privados, salario social complementario sin actualización para los trabajadores de la economía popular, despidos, suspensiones, y una inflación que aunque más baja, sigue horadando nuestros bolsillos.

Por todo esto, bien sabemos que volver a la normalidad no es, ni era, una opción para millones de personas en nuestro territorio. Es por ello que enfatizamos la importancia de discutir con amplitud de criterios las posibles políticas a llevar adelante. Medidas tales como la renta básica o el ingreso ciudadano, que permitan una cobertura universal, no condicionada, y desestructurante respecto a la relación trabajo-ingreso deberían entrar en la agenda de discusión. La jerarquización del trabajo que realizan las y los trabajadores desde la Economía Popular aparece como otra alternativa real en el debate local. Todo avance en la des-mercantilización del acceso a bienes y servicios es una solución ante una provisión de mercado que solo excluye más y más. Los varios millones de pesos que se podrían recaudar con un impuesto (extraordinario o no) a la riqueza, alcanzarían para cubrir lo necesario para sacar de la indigencia a todos los hogares que se encuentran en dicha condición. Efectivamente, ninguna propuesta de este tipo puede pensarse sin ser acompañada de una reforma tributaria integral y progresiva.

En un sentido semejante se presenta la intervención del comercio exterior, que es centro de debate al escribir estas líneas en relación al caso de la empresa exportadora Vicentín, la sexta en orden de importancia en su mercado. Endeudada fraudulentamente con el propio Estado, habiendo financiado la campaña política del anterior gobierno, Vicentín se presenta como la posibilidad concreta de adquirir una empresa poderosa capaz de interceder en el mercado exportador, competir en precios y facilitando el acceso a dólares. Su capacidad de terciar en nombre de la soberanía alimentaria parece un tanto menos claro, en tanto se siga enfocando en la exportación de soja a terceros mercados. No parece poder cumplir a la vez aquel objetivo y el de condicionar el mercado exportador. Se trata de decisiones de política económica sobre las que recaen severos lobbies que enturbian el debate.

En todo caso, resulta oportuno calibrar que muchas de estas opciones están en el debate público. Los promotores del neoliberalismo vernáculo insisten de forma desembozada con expresiones alarmistas sobre el rumbo de la economía local. Sus enardecidos dichos aportan muy poco al análisis, pero, como ha insistido uno de nuestros autores², parece haber menor interés por argumentos y evidencia que por promover intereses mediante otros recursos. Países capitalistas desarrollados están estatizando empresas, interviniendo en las cuentas externas y otras tantas medidas más que en las realidades nacionales como la argentina son presentadas como radicales.

2- Nos referimos al trabajo de Nicolás Dvoskin sobre "El anarcoliberalismo como terraplanismo económico", disponible en <http://sociedadeconomicacritica.org/ojs/index.php/cec/article/view/166>

Estas medidas son sólo unas pocas entre las posibles a tener en cuenta para que las clases populares no sean una vez más quienes paguen la crisis. Necesitamos impulsar políticas de Estado que puedan alterar el mapa de problemas estructurales nuestra economía. Y no pueden ser una utopía, son una necesidad palpable que se hace presente con la cara más bruta de la impotencia.

No podemos dejar pasar esta editorial sin mencionar que ha cobrado estado público el espionaje ilegal por parte del Estado a nuestra SEC, junto a otras organizaciones sociales o académicas, así como centenares de periodistas. Como una rémora antidemocrática enquistada en el Estado, la inteligencia por motivos ideológicos y políticos –incluso estando prohibida por la ley de inteligencia- sigue siendo un mecanismo de disciplinamiento³. Denunciamos esta situación y nos solidarizamos con quienes, como nosotros, creemos que es necesario democratizar los debates y proponer alternativas para un mundo mejor.

3- Lo hemos denunciado antes, aquí www.sociedadecriticacritica.org/editoriales/denunciamos-accionar-del-gobierno-la-confluencia-g20-fmi-nuestra-sociedad-economia-critica/